



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/45/630
22 de octubre de 1990

ORIGINAL: ESPAÑOL

Cuadragésimo quinto período de sesiones
Tema 12 del programa

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Situación de los derechos humanos en El Salvador

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General el informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador preparado por el Profesor José Antonio Pastor Ridruejo, Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con el párrafo 17 de la resolución 1990/77 de dicha Comisión, de 7 de marzo de 1990, y la decisión 1990/242 del Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1990.

Anexo

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL SALVADOR PREPARADO POR EL REPRESENTANTE ESPECIAL DE
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON EL
PARRAFO 17 DE LA RESOLUCION 1990/77 DE DICHA COMISION
Y LA DECISION 1990/242 DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 3	3
II. SITUACION POLITICA GENERAL	4 - 18	3
III. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES	19 - 29	6
IV. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS	30 - 82	9
A. Ejecuciones sumarias	30 - 60	9
B. Capturas, secuestros y desapariciones	61 - 67	14
C. Trato a los presos políticos	68 - 73	16
D. La justicia penal	74 - 82	18
V. RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CONFLICTO ARMADO	83 - 91	20
VI. ESFUERZOS PARA MEJORAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS RESULTADOS	92 - 101	24
VII. CONCLUSIONES	102 - 117	26
VIII. RECOMENDACIONES	118 - 122	29

I. INTRODUCCION

1. Se redacta el presente informe en cumplimiento de la resolución 1990/77 de la Comisión de Derechos Humanos, y la decisión 1990/242 del Consejo Económico y Social. El documento versa sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador durante los meses transcurridos de 1990 aunque, obviamente, debe ser leído a la luz de los informes presentados por el Representante Especial desde 1981. El Representante Especial expresa su agradecimiento al Gobierno de El Salvador y a otros gobiernos, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a organizaciones internacionales y no gubernamentales y a otras personas e instituciones por la cooperación prestada para el cumplimiento de su mandato.

2. En carta de 28 de junio de 1990 el Representante Especial expresó al Gobierno de El Salvador su deseo de hacer una nueva visita al país entre los días 22 y 30 de septiembre. El Gobierno autorizó finalmente que la visita se realizase entre los días 30 de septiembre y 7 de octubre.

3. Durante su estancia en El Salvador el Representante Especial tuvo ocasión de entrevistarse con el Presidente Constitucional de El Salvador, Alfredo Cristiani, y con altas autoridades y funcionarios de otros poderes de la República así como con jefes y oficiales de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad; examinó en los locales de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado a numerosos testigos que le presentaron esa y otras organizaciones humanitarias no gubernamentales y recibió amplia información oral y escrita de dichas organizaciones y de movimientos campesinos y sindicales; mantuvo reuniones con personas independientes; y visitó por fin la Penitenciaría de Santa Ana, donde tuvo ocasión de conversar en condiciones de confidencialidad con presos políticos de distinta ideología. El Representante Especial ha celebrado también fuera del país entrevistas con representantes del FMLN.

II. SITUACION POLITICA GENERAL

4. A lo largo de los meses transcurridos de 1990 ha persistido en El Salvador, con su reguero de sangre, violencia y destrucción, el conflicto armado que enfrenta a la Fuerza Armada regular y a las organizaciones guerrilleras del FMLN. Conviene añadir de todos modos que esa circunstancia no ha impedido la reanudación e intensificación del proceso de diálogo y negociación, auspiciado ahora por el Secretario General de las Naciones Unidas.

5. Efectivamente, el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN que tuvo lugar en 1989, quedó interrumpido sin llegar a alcanzarse ningún acuerdo concreto en las reuniones de septiembre en México y octubre en Costa Rica. La tercera reunión, prevista para el mes de noviembre en Venezuela, fue cancelada a raíz del atentado a la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) y la posterior ofensiva general lanzada por el FMLN. Pese a los deseos de paz expresados por la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, el año comenzó sin diálogo entre las partes en conflicto.

6. El 31 de enero de 1990 el Presidente Cristiani se entrevistó en Nueva York con el Secretario General de las Naciones Unidas 1/. Durante dicha entrevista, el Presidente Cristiani solicitó al Secretario General que ejerciera sus buenos oficios para lograr que el FMLN aceptara la iniciación de conversaciones con el Gobierno, de conformidad con los términos del acuerdo sobre "Procedimientos para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" suscrito por los Presidentes centroamericanos en la reunión en la cumbre Esquipulas II. La propuesta fue aceptada por el Secretario General 2/. Posteriormente, una declaración conjunta del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, James Baker, y del Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Edvard Shevardnadze, emitida en Moscú el 10 de febrero de 1990, expresó el apoyo decidido de ambos Estados a un arreglo pacífico del conflicto en El Salvador y su respaldo al Secretario General de la Organización en sus esfuerzos por alcanzar el alto al fuego definitivo y la reanudación de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla 3/.

7. El 13 de marzo de 1990, el FMLN decretó una suspensión parcial de los atentados contra funcionarios y empleados gubernamentales no vinculados al Ejército ni a los grupos paramilitares, así como de las acciones de sabotaje contra vehículos de transporte público, establecimientos comerciales y líneas telefónicas, como un gesto orientado a reiniciar las negociaciones de paz 4/. A cambio, el FMLN solicitaba al Gobierno que la Fuerza Armada cesase toda forma de agresión a la población civil.

8. El 21 de marzo de 1990, el Ministro de Información anunció que el Gobierno estaba listo para reanudar inmediatamente el diálogo con la guerrilla sin ninguna precondición 5/. A finales de dicho mes, el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, se reunió por separado con altos dirigentes gubernamentales, con líderes del FMLN, y con dirigentes de Convergencia Democrática, en la ciudad de Caracas, con el objeto de analizar las posibilidades de activar el proceso de diálogo 6/.

9. Así, el 4 de abril de 1990, el Secretario General de la Organización se reunió en Ginebra con una delegación gubernamental encabezada por el Ministro de Justicia, Oscar Santamaría, e integrada por tres embajadores acreditados en países europeos, y una delegación del FMLN integrada por los comandantes Shafik Handal, Ana Guadalupe Martínez y Roberto Cañas. Ese mismo día, el Representante del Secretario General acordó con el jefe de la delegación del Gobierno y con el jefe de la delegación del FMLN, Shafik Handal, el inicio inmediato de un período de preparación y reflexión, así como de consultas del Representante del Secretario General, con el objeto de sentar las bases para la realización de reuniones directas. La intervención del Secretario General se producía a solicitud de los Presidentes centroamericanos y en el marco del mandato de buenos oficios que le confiriera el Consejo de Seguridad a través de la resolución 637 (1989). El Secretario General acordó llevar a cabo dicha tarea a petición del Gobierno y del FMLN, y ante la formulación de seguridades por las partes de acudir a la negociación con un propósito serio de lograr la paz, y de buena fe.

10. El formato, la mecánica, el ritmo y la agenda del proceso de negociación, quedaron definidos en una reunión celebrada entre las dos partes y el Representante del Secretario General en la ciudad de Caracas, el 21 de mayo de 1990.

11. La segunda ronda de negociaciones bajo los auspicios de la Organización tuvo lugar del 19 al 25 de junio de 1990 en Oaxtepec, México, según las modalidades definidas en el acuerdo de Ginebra del 4 de abril. De acuerdo a un comunicado emitido por la Organización, las partes discutieron en detalle y en profundidad los temas relativos a los dos primeros puntos de la agenda, es decir Fuerza Armada y derechos humanos. El Gobierno habría propuesto una reestructuración del Ejército, mientras que el FMLN habría planteado su depuración, la reducción de los efectivos militares, y su sometimiento pleno al poder civil 7/. El FMLN habría insistido asimismo en la desaparición de los grupos paramilitares, fuerzas de Defensa Civil y los denominados "escuadrones de la muerte", la creación de un solo cuerpo policial bajo mando civil, y la aplicación de sanciones a los militares comprometidos con actos de violación de los derechos humanos, especialmente con los casos más significativos, tales como los asesinatos de Monseñor Romero, de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana, o el atentado contra la sede de FENASTRAS, así como con casos de corrupción 8/.

12. Según un cable de la Agencia Associated Press del 26 de junio de 1990, ambas partes estaban de acuerdo en la constitución de una comisión encargada de verificar la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, existía una diferencia esencial: para el Gobierno, debía tratarse de una organización gubernamental supervisada y asesorada por las Naciones Unidas; para el FMLN, debía tratarse de una comisión de las Naciones Unidas. La diferencia se resolvió durante la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en San José, Costa Rica, del 20 al 26 de julio de 1990, al adoptarse el primer acuerdo sustantivo entre las partes: el Acuerdo sobre Derechos Humanos, que será analizado en el capítulo VI del presente informe.

13. La cuarta ronda de negociaciones tuvo lugar en San José, Costa Rica, del 17 al 22 de agosto de 1990, y habría estado dedicada al primer punto de la agenda establecida en Caracas el 21 de mayo: el tema de la Fuerza Armada. La complejidad de los asuntos incluidos en dicho punto no habría permitido alcanzar mayores acuerdos que el de volverse a reunir para insistir en el tratamiento del tema.

14. Por último, la quinta ronda de negociaciones tuvo lugar en San José, Costa Rica, finalizando el 18 de septiembre de 1990. El tema militar habría sido nuevamente tratado sin poder alcanzarse un acuerdo sustancial.

15. Sin embargo, cabe destacar que el 19 de septiembre de 1990 se suscribió en El Salvador un acuerdo electoral entre todos los partidos políticos incluyendo los tres partidos de izquierda. Si bien dicho acuerdo fue producto de una comisión interpartidaria designada para tal efecto, su firma fue en gran parte posible gracias al proceso de negociación en curso y a la aprobación de las dos partes en el conflicto.

16. Durante su estancia en El Salvador, el Representante Especial ha comprobado una vez más las ansias profundas del pueblo salvadoreño por que el diálogo conduzca rápidamente, y de una vez por todas, a la solución negociada del conflicto. Ansias sabias, que el Representante Especial comparte totalmente, pues está convencido de que el respeto a los derechos humanos pasa ineludiblemente por el cese del enfrentamiento entre la Fuerza Armada y el FMLN. El buen y rápido resultado de la negociación en curso presenta una importancia de primera magnitud para la erradicación de las violaciones de los derechos humanos en El Salvador.

17. En otro orden de cosas, señala el Representante Especial que el día 1° de abril de 1990, la Asamblea Legislativa dejó de renovar el estado de sitio que había proclamado con ocasión de la ofensiva generalizada del FMLN de noviembre de 1989 9/.

18. Entre los cambios de altos cargos ocurridos en El Salvador durante los últimos meses hay que recordar que a primeros de junio de 1990 la Asamblea Legislativa nombró Fiscal General de la República al doctor Roberto Mendoza 10/; y que el día 1° de septiembre siguiente fue nombrado Ministro de Defensa el Coronel René Emilio Ponce, que hasta entonces había ocupado el puesto de Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada 11/.

III. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

19. Según informaciones de distintas procedencias recibidas por el Representante Especial sobre la situación económica del país, y que por razones de limitación de espacio no se recogen en detalle, a lo largo de los meses transcurridos de 1990 han persistido los factores determinantes de un progresivo y preocupante endurecimiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos salvadoreños; entre dichos factores ocupa un lugar de primera magnitud la continuación del conflicto armado. De acuerdo a fuentes autorizadas independientes el aumento de precios al consumo habría alcanzado en el último año un 25%, sin que dicho aumento se viese correspondido por una elevación del nivel de los salarios.

20. El Representante Especial ha continuado recibiendo múltiples noticias de diversas fuentes sobre hostigamiento a las actividades de los movimientos sindicales y de cooperativas. Tales hostigamientos habrían llegado en ocasiones a capturas por tiempo superior al constitucionalmente permitido, malos tratos e incluso ejecuciones sumarias y desapariciones, hechos de los que se hará mención en el lugar correspondiente en este informe.

21. Así, 21 miembros de la Confederación de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) habrían sido detenidos por las autoridades bajo la acusación de destrucción del medio ambiente; se informa también que el 27 de marzo desapareció un líder de la llamada "Alianza Democrática Campesina" 12/.

22. El Representante Especial ha tenido noticias de que a finales del mes de abril de 1990 la Fuerza Armada habría acosado a numerosas familias de localidades repobladas en el norte y este del país para que abandonasen nuevamente las tierras 13/. En entrevistas mantenidas en El Salvador con varias organizaciones de esas localidades, el Representante Especial volvió a oír la queja del continuo

acoso gubernamental, particularmente por lo que respecta a la falta de documentación - lo que impide a los pobladores desplazarse e inscribirse en el censo electoral - y a los obstáculos que pone la Fuerza Armada para la recepción de ayuda alimenticia y sanitaria. El Representante Especial trasladó las quejas a las autoridades competentes del Ministerio del Interior y la respuesta fue que la falta de documentación se debía al hecho de que, en las zonas en cuestión, las alcaldías habían sido incendiadas por el FMLN, lo que motivó la destrucción de los libros del registro civil; además - agregaron aquellas autoridades - el Gobierno está iniciando los trámites para proveer a aquellas personas de la documentación pertinente, bien aplicando la ley, bien preparando la modificación de la ley si ello se revela necesario. Dijeron también las autoridades del Ministerio del Interior que el 15 de mayo de 1990 el FMLN robó alimentos que enviaba la Comisión Nacional de Asistencia a la Población Desplazada (CONADES), una organización gubernamental, a poblaciones repobladas, secuestrando a 26 promotores que luego fueron liberados. El Representante Especial fue informado finalmente de la creación por parte del Gobierno de una Oficina de Asistencia a Repatriados.

23. El Representante Especial ha continuado recibiendo información de acosos por parte de las autoridades hacia organizaciones y personas religiosas; de estos acosos se quejó el Obispo auxiliar de El Salvador en su homilía del 28 de enero de 1990 14/. El Representante Especial ha recibido también noticias de otros hostigamientos a sacerdotes y religiosos. Así, el día 20 de mayo el Obispo auxiliar de San Salvador denunció el secuestro de un sacerdote italiano y de un trabajador lego por fuerzas paramilitares; ambas personas fueron liberadas al día siguiente de su captura después de pasar un interrogatorio 15/. Se informa asimismo que el día 2 de junio personas desconocidas asaltaron los locales de una comunidad religiosa femenina 16/. También la Iglesia luterana se queja de irrupción de la Fuerza Armada en sus locales, de amenazas al Obispo y de detenciones a sus miembros 17/.

24. Respecto a las actividades de los movimientos sindicalistas, sostiene la Fuerza Armada de El Salvador 18/ que a partir de enero de 1990 han conocido una intensificación con móviles políticos, puesto que exigen prestaciones sociales o alzas de salarios que el Gobierno o los empresarios privados no están en condiciones de satisfacer; el objetivo de aquéllos sería la desestabilización política al servicio del FMLN. Sea lo que fuere, el Representante Especial recuerda que las acciones gubernamentales deben sujetarse a las disposiciones constitucionales y legales y respetar escrupulosamente los derechos humanos.

25. La noche del 3 de julio habrían sido asaltados los locales del Movimiento Popular Social Cristiano, uno de los partidos que integran la coalición de izquierdas Convergencia Democrática por un grupo de personas armadas vestidas de civil 19/.

26. El día 21 de abril de 1990 murió el profesor de la Universidad de El Salvador Rendrejo Tejeda a consecuencia de las heridas causadas por la explosión de una bomba colocada en su automóvil. El portavoz de la Universidad manifestó que el atentado formaba parte de la guerra psicológica desencadenada contra la institución por los militares y la extrema derecha 20/.

27. En lo que respecta al proceso de reforma agraria, el Representante Especial ha tenido noticias de que en mayo de 1990 portavoces de la Unión Campesina Salvadoreña denunciaron una amenaza de evicción contra 23 familias de una cooperativa de Ahuachapán; hay que hacer constar de todos modos que la evicción habría sido decretada por la autoridad policial 21/. El Representante Especial ha sabido que la evicción tuvo lugar en el mes de agosto 22/. En San Salvador representantes de organizaciones campesinas manifestaron al Representante Especial que por parte de las autoridades habría el deseo de obstaculizar la reforma agraria por medio de evicciones, parcelaciones y negativa de créditos a las organizaciones menos dóciles. Sin embargo, según la documentación suministrada al Representante Especial por Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA), entre junio de 1989 y septiembre de 1990 se han entregado 16.113 títulos al amparo del Decreto 207. En la misma documentación se reconoce de todos modos la existencia de los desalojos entre las fechas señaladas; las causas de los desalojos serían ajenas a FINATA, a saber: la renuencia del antiguo propietario a cumplir con la ley, la alta conflictividad en zonas específicas, amenazas de los antiguos propietarios a los campesinos, traspaso a terceros y otros. FINATA estaría desarrollando una serie de acciones para evitar los desalojos.

28. En los informes que viene redactando desde 1981 el Representante Especial ha dado cuenta de los persistentes ataques sistemáticos de las organizaciones guerrilleras del FMLN contra la infraestructura económica del país; ataques que a su entender han perjudicado gravemente el disfrute presente y futuro de importantes derechos económicos, sociales y culturales de las ciudades salvadoreñas. En lo que respecta a los meses transcurridos de 1990, conviene recordar que el día 13 de marzo el FMLN decretó una suspensión parcial de determinadas medidas, entre ellas las acciones de sabotaje contra vehículos de transporte público, establecimientos comerciales y líneas telefónicas. Según ha sabido el Representante Especial no se han registrado en el país desde tal fecha ataques guerrilleros contra el transporte público (los llamados "paros") y establecimientos comerciales; algunas alegaciones en contra no han sido comprobadas.

29. Pero desde luego, las organizaciones del FMLN han persistido en sus acciones de sabotaje contra la infraestructura eléctrica del país. Así, según la prensa local 23/, comandos del FMLN dinamitaron el día 2 de julio un poste del tendido eléctrico en la calle de San Antonio Abad de la capital. De otro lado, según informaciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el FMLN atacó una subestación cercana a la ciudad de San Miguel ocasionando daños por 9.500.000 colones. Se informa también de la explosión de un artefacto en una torre del servicio eléctrico situada en la Colonia Ferrocarril de la capital, explosión que causó la muerte de una persona y heridas en otras 24/. De otro lado, en la noche del 30 de julio, el FMLN destruyó ocho torres de soporte de cables eléctricos reduciendo en un 30% la recepción de energía en el país 25/. Los días 13 y 14 de agosto el FMLN realizó un importante sabotaje contra el sistema eléctrico del país destruyendo numerosos pilones y torres de conducción y provocando un déficit de energía eléctrica del 45% 26/.

IV. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

A. Ejecuciones sumarias

30. A lo largo de los meses transcurridos de 1990, el Representante Especial ha continuado recibiendo de múltiples fuentes numerosa información sobre ejecuciones sumarias políticamente motivadas, equivalentes a asesinatos, de personas no combatientes, y al igual que en informes anteriores quiere dejar constancia de la dificultad de determinar con precisión el número exacto de tales crímenes. Ello es así por las dificultades de la investigación y por el hecho de que las cifras difieren según las fuentes. Todo ello aconseja suma prudencia y circunspección en la apreciación general de esta clase de hechos.

31. El Representante Especial transcribe a continuación, y en tablas comparativas con las del año pasado, las cifras de ejecuciones sumarias comunicadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado 27/ y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) y que se imputan a miembros del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil:

Ejecuciones sumarias políticamente motivadas en personas
no combatientes, que se imputan a miembros del Ejército
y de las Fuerzas de Seguridad y Defensa Civil

	<u>Fuente: Tutela Legal</u>		<u>Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)</u>	
	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Enero	7	1	8	6
Febrero	13	7	6	2
Marzo	17	6	24	7
Abril	2	4	5	2
Mayo	0	7	4	4
Junio	1	9	6	7
Julio	5	8	8	10
Agosto	6	0+	7	4
Septiembre	1			

32. Respecto a las ejecuciones sumarias que ahora se consideran, el Representante Especial ha recibido igualmente informaciones sobre hechos específicos, comprendidos indudablemente en las cifras consignadas en los párrafos anteriores. Se recogen seguidamente algunos de estos hechos en el entendido de que la relación es selectiva y no exhaustiva.

33. Así, el día 2 de febrero de 1990, soldados del Batallón Atlacatl habrían capturado en la localidad de San José Cortez, Departamento de San Salvador, a Julián Rosales López, de 42 años de edad, carpintero de oficio. El día 8 de febrero los familiares del capturado informaron que el Sr. López había muerto en prisión. Se informa asimismo que, de acuerdo a la autopsia, la muerte se produjo a consecuencia de intensas torturas 28/.

34. El día 6 de febrero, miembros de la Policía de Hacienda habrían capturado, torturado y asesinado a tres mujeres de la localidad repoblada de Santa Marta 29/.

35. El día 10 de marzo el Obispo auxiliar de San Salvador denunció la violación de una joven de 18 años y el asesinato de su padre por miembros de una unidad de la Defensa Civil. Los hechos habrían ocurrido en la Colonia Florencia de Cuscatancingo 30/.

36. El día 20 de marzo de 1990 habría sido asesinado un sindicalista por personas vestidas de civil que se identificaron como miembros de la Fuerza Armada 31/.

37. El día 22 de junio de 1990, miembros de la Fuerza Armada habrían matado en la Finca Pasarena, Departamento de San Salvador, a dos campesinos, uno de ellos miembro de CORDECOM (Corporación de Comunidades de Cooperación y Seguridad). Según la fuente informante 32/, el Ejército habría explicado que se trataba de dos subversivos muertos en combate.

38. Una testigo relató al Representante Especial que el día 23 de julio de 1990 soldados uniformados mataron por disparos a un hijo suyo, de 22 años, retrasado mental; los hechos ocurrieron en la jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador.

39. Otro testigo examinado por el Representante Especial relató que el día 1º de septiembre de 1990, miembros del Ejército capturaron a su hijo, de 16 años, que era combatiente del FMLN; el cadáver del hijo fue encontrado al día siguiente con señales innegables de tortura.

40. Otro testigo manifestó al Representante Especial que el día 13 de septiembre de 1990 un familiar fue objeto de disparos por miembros de la Defensa Civil cuando se disponía a entrar en su casa; el familiar murió el día siguiente como consecuencia de las heridas recibidas.

41. Aunque no se trata de ejecución sumaria, el Representante Especial quiere dar cuenta de que, según declaración de una testigo el día 8 de julio de 1990 tres miembros del Ejército penetraron en su casa en donde después de golpear y amarrar al marido, violaron repetidamente a la testigo en presencia de una hija de 9 años; los soldados amenazaron con matar a la testigo si denunciaba los hechos.

42. El Representante Especial ha continuado recibiendo numerosa información sobre ejecuciones sumarias políticamente motivadas imputables a los llamados "escuadrones de la muerte". Según las fuentes informantes, tales escuadrones estarían vinculados a miembros de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad o tolerados o protegidos por ellos, afirmación que parece en principio verosímil, aunque el Representante Especial debe señalar que las circunstancias en que actúan los repetidos escuadrones no contribuyen precisamente a facilitar la investigación de los hechos que en concreto se les atribuyen. No hay que descartar, en efecto, que al amparo de la actividad de los "escuadrones de la muerte" se cometan delitos de carácter común. En todo caso, Tutela Legal imputa las siguientes ejecuciones sumarias a los "escuadrones de la muerte" durante los meses transcurridos de 1990.

A efectos comparativos, se transcriben también las cifras correspondientes a los mismos meses de 1989:

Ejecuciones sumarias políticamente motivadas imputables
a los denominados "escuadrones de la muerte"

(Fuente: Tutela Legal)

	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Enero	2	9
Febrero	4	4
Marzo	3	8
Abril	2	8
Mayo	4	3
Junio	0	5
Julio	0	8
Agosto	2	1+
Septiembre	2	

43. En lo que respecta a las ejecuciones sumarias imputadas a miembros de la Defensa Civil, el Representante Especial quiere hacerse eco de la preocupación que en julio de 1990 expresó al Estado Mayor de la Fuerza Armada la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador. Dijo la Comisión: "Con una frecuencia verdaderamente alarmante, miembros de las Defensas Civiles de las diversas zonas del país se han visto involucradas en graves hechos de sangre, robos, asaltos, violaciones y abusos de autoridad, lo que mantiene a la ciudadanía en un estado de permanente temor e inseguridad. En vista de esta situación la Comisión ... ha considerado de urgente necesidad plantear ante dichas autoridades esta preocupación que ya constituye un clamor general" 33/. El Estado Mayor de la Fuerza Armada reconoció al Representante Especial la existencia de abusos por parte de elementos de la Defensa Civil, a los que se dispone a poner fin.

44. Algunos integrantes de movimientos sindicales y campesinos mostraron con gran preocupación al Representante Especial hojas multicopiadas en que aparecían sus nombres y su presunta condición de afectos al FMLN. Dichas hojas habrían sido ampliamente difundidas y al decir de aquellas personas formaban parte de una guerra psicológica encaminada a producir intimidación y terror; las hojas eran consideradas como constitutivas de amenazas de muerte y otras graves violaciones de los derechos humanos.

45. Reiterando las cautelas metodológicas antes expuestas y tomando en consideración el conjunto de la información a que ha tenido acceso el Representante Especial, cabe concluir que durante los meses transcurridos de 1990 ha persistido la práctica de ejecuciones sumarias por parte de elementos del aparato estatal, particularmente por miembros de la Fuerza Armada, si bien hay que agregar el dato importante de que la cifra de este tipo de violaciones de los derechos humanos es inferior a la del pasado año. Es esta también la opinión de fuentes independientes

/...

de completa fiabilidad. El Representante Especial hace observar de todos modos la existencia de un clima de amenazas a sectores particulares de la población - los integrantes de movimientos sindicales y campesinos - que se dicen expuestos a las peores represalias.

46. En lo que atañe a ejecuciones sumarias imputables a las organizaciones guerrilleras, el Representante Especial ha recibido también amplia información. Así, según Tutela Legal y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) las cifras son las siguientes:

	<u>Ejecuciones sumarias imputables a las</u> <u>organizaciones guerrilleras</u>		Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)	
	<u>Fuente: Tutela Legal</u>		<u>1989</u>	<u>1990</u>
	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Enero	8	0	33	13
Febrero	3	1	18	2
Marzo	2	0	21	7
Abril	4	2	28	5
Mayo	4	3	36	6
Junio	5	2	21	4
Julio	1	4	10	6
Agosto	3	0+	6	6
Septiembre	0		-	-

47. El Representante Especial ha recibido también información específica sobre ejecuciones sumarias equivalentes a asesinatos imputados a las organizaciones guerrilleras que, de manera selectiva y no exhaustiva, se recoge en los párrafos que siguen.

48. Según la prensa local salvadoreña 34/, en un día del mes de mayo de 1990 miembros del FMLN habrían torturado cruelmente y posteriormente asesinado a un antiguo soldado, José Angel Sánchez, cerca de la población de Ilobasco.

49. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el día 13 de mayo de 1990, miembros del FMLN habrían asesinado en el Cantón Palacios, Jurisdicción de Ilobasco, al joven José Angel Lemus Sánchez, que acababa de cumplir el servicio militar en la Fuerza Armada 35/.

50. De acuerdo a testigos escuchados por el Representante Especial, miembros del FMLN secuestraron y asesinaron como presunto informador de la Fuerza Armada al campesino José Villacorta Ramos, en la localidad de Tomacatepeque, Departamento de San Salvador. Los hechos habrían ocurrido el 30 de mayo de 1990.

51. Según testimonios escuchados por el Representante Especial en San Salvador, miembros del FMLN asesinaron el 7 de junio de 1990 a dos hermanos, Pedro Enrique Medina Alvarado y Sebas Raúl Medina Alvarado, en un cantón del Departamento de Santa Ana.

52. La prensa local 36/ recoge también información de la Fuerza Armada según la cual una mujer, Marta Flores Beltrán, y la menor María Elena Romero fueron asesinadas a tiros por un comando del FMLN, en el cantón Mejicanos, al norte de San Salvador, en un día del mes de junio.

53. De otro lado, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador denunció al Representante Especial el asesinato el día 9 de julio de 1990 del Mayor Carlos Figueroa Morales, que desempeñaba el cargo de jefe del Departamento Jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada; el hecho fue reivindicado por el comando "Modesto Ramírez" del FMLN.

54. El 17 de julio de 1990, comandos del FMLN asesinaron al Capitán de la Fuerza Armada Ramón Aristides Reyes cuando conducía su coche por la localidad de Santa Tecla. El hecho fue reivindicado por esos comandos el mismo día del asesinato 37/.

55. Días más tarde, el 23 de julio de 1990, fue asesinado por elementos del FMLN el juez de la Unión Adalberto Rubio, cuando se disponía a descender de un autobús interurbano; se daba la circunstancia de que el asesinado era padre de dos oficiales de la Fuerza Armada 38/.

56. Según la prensa local 39/, Víctor Manuel Rojas Martínez, miembro de la Defensa Civil de Los Llanos de Renderos, del cantón Chaltepéc de Santo Tomás, fue asesinado el 30 de julio de 1989; la impresión imperante en sus convecinos es que el asesinato fue perpetrado por miembros del FMLN.

57. Otro periódico de San Salvador 40/ relata el asesinato, el 30 de julio de 1990, del campesino Máximo Irahela, vecino del cantón Cuyantepeque, en el Departamento de Cabañas; los testigos presenciales atribuyen el hecho a miembros del FMLN.

58. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 41/ da cuenta de los dos atentados que en la noche del 27 de junio de 1990 sufrió el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ricardo Alvarenga, y de los que salió ileso. Los hechos se atribuyen a comandos del FMLN, si bien un político de la oposición 42/ puso en duda esta imputación.

59. La conclusión que obtiene el Representante Especial de la información recogida en los párrafos anteriores es que también las organizaciones del FMLN han persistido durante los meses transcurridos de 1990 en la práctica de ejecuciones sumarias, si bien su número es inferior al del año pasado; y que no constan ejecuciones sumarias en los meses siguientes a la firma del Acuerdo de San José.

60. El Representante Especial ha recibido también noticias de algunas acciones urbanas de miembros del FMLN que habrían afectado a la población civil. Así, según información gubernamental 43/, un comando del FMLN habría hecho estallar un coche-bomba en la ciudad de Santa Tecla el día 2 de abril de 1990. La explosión causó la muerte de un oficial de la Fuerza Armada y cinco personas civiles. También informaron fuentes gubernamentales 44/ que el día 12 de julio de 1990, miembros del FMLN lanzaron un artefacto explosivo contra un camión militar en un bulevar de la capital, resultando herida por las esquirlas una señora que pasaba por el lugar. El mismo día, al final de la 75 Avenida Norte de San Salvador, miembros del FMLN hicieron estallar un artefacto que provocó el derribo de un poste del alumbrado público y heridas en una joven. Se señala en la misma información que el día anterior, el artefacto colocado en otro lugar de la capital contra el sistema de conducción eléctrica, causó la muerte de una persona civil.

B. Capturas, secuestros y desapariciones

61. Las organizaciones no gubernamentales explicaron en San Salvador al Representante Especial que durante los meses transcurridos de 1990 continuaron ampliamente las detenciones de personas por motivos políticos. Varios testigos declararon también haber sido objeto de capturas, aunque por lo general la liberación se produjo dentro de las 72 horas siguientes. Las capturas se producen, sin duda, pero el Representante Especial reconoce de nuevo la facultad de las autoridades salvadoreñas para detener a las personas que atenten por medios violentos contra el orden constitucional, siempre que la detención y el procedimiento judicial subsiguiente se ajusten a los estándares constitucionales y a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido la República de El Salvador.

62. Tutela Legal proporciona las siguientes estadísticas:

Capturas imputables al Ejército y a los Cuerpos de Seguridad y Defensa Civil

	<u>Total de personas capturadas y no liberadas</u>		<u>Personas capturadas actualmente en detención</u>		<u>Personas capturadas y posteriormente desaparecidas</u>	
	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Enero	21	68	12	50	9	18
Febrero	48	65	31	54	17	11
Marzo	28	38	25	29	3	9
Abril	64	38	55	23	9	15
Mayo	28	34	24	18	4	16
Junio	29	34	25	30	4	4
Julio	66	34	61	28	5	6
Agosto	50	1+	33	0+	17	1+
Septiembre	49		39		10	

63. Respecto a las desapariciones forzadas o involuntarias, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado proporciona las siguientes cifras correspondientes a los meses transcurridos de 1990 y sus equivalentes de 1989:

Desapariciones forzadas o involuntarias

(Fuente: Tutela Legal)

	Total de personas desaparecidas		Personas desaparecidas luego de ser capturadas por el Ejército, Cuerpos de Seguridad o Defensa Civil		Personas desaparecidas luego de ser secuestradas por la guerrilla		Personas desaparecidas sin conocerse las circunstancias del hecho o los presuntos responsables	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Enero	26	31	9	18	8	3	9	10
Febrero	26	19	17	11	4	0	5	8
Marzo	12	20	3	9	4	0	5	11
Abril	27	21	9	15	8	0	10	6
Mayo	5	27	4	16	0	1	1	10
Junio	10	14	4	4	0	2	6	8
Julio	12	14	5	6	2	1	5	7
Agosto	28	1+	17	1+	3	0+	8	0+
Septiembre	19		10		3		6	

64. El Representante Especial quiere referirse particularmente a un caso muy grave de desaparición, ocurrido a finales del año pasado, pero que continúa hoy día. Efectivamente, según testimonios escuchados por el Representante Especial en El Salvador, el día 29 de diciembre de 1989 cuatro campesinos de la cooperativa de San Cayetano fueron capturados por miembros de la Fuerza Armada y de la Defensa Civil; desde entonces nada se ha sabido de su paradero y los familiares dan por desaparecidos a los cooperativistas 45/. En épocas anteriores otros miembros de la misma cooperativa fueron capturados por fuerzas gubernamentales. En los primeros meses de 1990 miembros del Ejército continuaron acosando a la cooperativa de San Cayetano.

65. También por parte de las organizaciones guerrilleras se han realizado secuestros de personas. Las cifras que suministra Tutela Legal y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) son las siguientes:

Personas secuestradas y reclutadas forzosamente por la guerrilla

	Fuente: <u>Tutela Legal</u>						Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)	
	Total (Tutela Legal)		Personas secuestradas por la guerrilla		Personas reclutadas forzosamente por la guerrilla		Población civil secuestrada por el FMLN	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Enero	8	3	8	3	0	0	85	31
Febrero	4	0	4	0	0	0	20	5
Marzo	4	0	4	0	0	0	30	8
Abril	8	0	8	0	0	0	43	25
Mayo	0	1	0	1	0	0	20	3
Junio	0	2	0	2	0	0	9	10
Julio	2	7	2	1	0	6	2	1
Agosto	3	0+	3	0+	0	0+	14	1
Septiembre	3		3		0		-	-

66. En lo que concierne a los alegados reclutamientos forzosos por el FMLN, el Representante Especial da cuenta de la noticia aparecida en la prensa local 46/, según la cual elementos de la organización guerrillera secuestraron a cerca de 15 alumnos, incluidas algunas niñas, en una escuela rural de la población San Luis de la Reina, Departamento de San Miguel, al parecer con fines de incorporación al FMLN. El Representante Especial ha recibido información de otros casos de reclutamiento forzoso de personas jóvenes. Un representante del FMLN desmintió rotundamente estas noticias al Representante Especial manifestando que desde hace varios años es política de la organización, fielmente cumplida, no practicar tal tipo de reclutamiento.

67. El Representante Especial quiere referirse también a un caso de secuestro ocurrido el 29 de noviembre de 1989 pero cuyos efectos continuaron a lo largo del presente año. Se trata del secuestro por un comando del FMLN, en la fecha indicada, en la céntrica colonia Escalón de San Salvador, de cinco periodistas, los señores José Antonio Ceballos Martínez, José Alfredo Melgar, Aníbal Jesús Edilberto Quijada López, Oscar Herrera y Aníbal Dubón Mejía. En San Salvador el Representante Especial escuchó el testimonio de los familiares de los periodistas en cuestión, quienes manifestaron no tener la menor noticia de su paradero a pesar de las múltiples gestiones realizadas ante el FMLN por medio de organizaciones humanitarias.

C. Trato a los presos políticos

68. En entrevistas mantenidas en El Salvador, integrantes de diversas organizaciones y los propios presos políticos se quejaron ante el Representante Especial del hecho de que a finales del mes de agosto de 1990 parte de aquellos presos fuesen sacados durante la noche de la Penitenciaría de Mariona y trasladados a otras penitenciarías del país en donde conviven con los presos comunes.

El Representante Especial entiende que el hecho en sí del traslado no constituye una violación de los derechos humanos. Alegaron sin embargo los presos políticos que el traslado nocturno se habría hecho bajo amenazas graves y con brutalidad y violencia, circunstancias que negaron al Representante Especial funcionarios competentes. Manifestaron asimismo aquellos presos que la convivencia con los reclusos comunes es una fuente continua de peligros.

69. El Representante Especial pudo realizar una visita a la Penitenciaría de Santa Ana, donde había cerca de 80 presos políticos, acusados la mayoría de ellos de colaboración con el FMLN; un corto número de presos eran antiguos integrantes de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad, acusados o procesados por delitos de motivación política. El Representante Especial comprobó que los presos políticos convivían con los reclusos comunes en unas muy duras condiciones de hacinamiento.

70. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales que se entrevistaron en El Salvador con el Representante Especial informó de una difundida práctica de torturas y malos tratos a los presos políticos durante el interrogatorio extrajudicial. En la Penitenciaría de Santa Ana dichos presos políticos entregaron al Representante Especial numerosos testimonios firmados que revelarían la existencia de tal práctica.

71. Durante su visita al país, el Representante Especial examinó a una muestra relativamente amplia de antiguos o actuales presos políticos. Al igual que el pasado año, los presos pertenecientes a organizaciones hicieron el mismo esquema de declaración: interrogatorios muy largos con los ojos vendados, sin poder sentarse o dar alivio a sus necesidades físicas, golpes abundantes, y en ocasiones empleo de una capucha que imposibilita la respiración y provoca el desmayo físico, inmersión de la cabeza en pilas de agua, choques eléctricos y amenazas a ellos mismos o a familiares. Los testigos no organizados sólo se quejaron de interrogatorios rigurosos con los ojos vendados.

72. El Representante Especial debe admitir que el número y condición de testigos que le resultó posible interrogar no le permiten establecer con precisión el porcentaje de los sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la práctica existe, desde luego, aunque en su opinión no obedece a una política institucionalizada; el que un detenido sea o no sometido a ella depende de una serie de factores coyunturales, como el interés de la información que pueda transmitir, la situación militar del conflicto, la identidad de los captores y otros.

73. De acuerdo a información gubernamental 47/, miembros del FMLN habrían torturado cruelmente el 7 de mayo de 1990 a un soldado de la Fuerza Armada, José Santos Monterrosa, en la población de Jujutla, cerca de Ahuachapán. El soldado fue recogido con vida y trasladado a un centro asistencial.

D. La justicia penal

74. El Representante Especial ha puesto de relieve insistentemente en los informes que viene redactando desde 1981 su preocupación por el insatisfactorio funcionamiento de conjunto de la justicia penal salvadoreña, aunque no ha dejado de recoger las dificultades existentes al respecto ni tampoco la encomiable actitud de independencia de algunos órganos judiciales; actitud que no consigue sin embargo que la situación de conjunto del sistema alcance los estándares enunciados en la Constitución vigente y en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos obligan a la República de El Salvador.

75. Debe señalarse con todo que durante los meses transcurridos de 1990 se han registrado algunos casos interesantes de sentencias condenatorias dictadas por los tribunales salvadoreños. Así, en mayo de 1990, un sargento de la Fuerza Armada fue condenado por la muerte, en octubre de 1982, del ciudadano de los Estados Unidos M. D. Kline 48/. Otra sentencia condenatoria digna de mención es la dictada el día 8 de marzo de 1990 por el Juzgado 7° de lo Penal contra 26 personas de un grupo paramilitar por la llamada "matanza de San Agustín", perpetrada el 4 de marzo de 1982, en la que perecieron 10 niños y 13 personas adultas 49/. El Representante Especial señala de otro lado que en la Penitenciaría de Santa Ana conversó con presos políticos que habían pertenecido a la Fuerza Armada o Cuerpos de Seguridad; uno de ellos era un antiguo oficial del Ejército, procesado por un delito de secuestro; otro un antiguo miembro de la Guardia Nacional, condenado por homicidio; otro un antiguo sargento del Ejército procesado también por homicidio; y otro un antiguo oficial del Ejército condenado en mayo de 1988 por violación de los derechos humanos. De otro lado, en el informe sometido por la Corte Suprema 50/, se mencionan más de 70 casos de juicios instruidos contra personas pertenecientes a la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad. La alegada impunidad de los miembros del Ejército y Cuerpos de Seguridad no es, por tanto, absoluta.

76. Dejando la debida constancia del interés de los datos recogidos en el párrafo anterior, por más que pueda parecer dilatado el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y las fechas de las sentencias, el Representante Especial comprueba la falta de progreso de los procedimientos instruidos por muchos otros casos de graves violaciones de los derechos humanos. No consta, en efecto, progreso significativo alguno en el procedimiento instruido por el asesinato, en marzo de 1980, de Monseñor Romero 51/. En cuanto al proceso por el asesinato de Herbert Amaya, perpetrado el 26 de octubre de 1987, el Juez Primero de lo Penal de San Salvador decretó el sobreseimiento provisional de Jorge Alberto Miranda Arévalo, detenido desde el 23 de diciembre de 1987 52/. El Sr. Miranda sigue detenido bajo la acusación de actos de terrorismo 53/. Según informó al Representante Especial el Fiscal General de la República, la fiscalía interpuso recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento referido.

77. En cuanto al procedimiento seguido por la ejecución masiva de campesinos en San Sebastián, perpetrada el 21 de septiembre de 1988, informa el Fiscal General al Representante Especial que figura involucrado en él un Mayor del Ejército, quien comparecerá próximamente ante un tribunal de jurado; en ese procedimiento se decretó el sobreseimiento provisional respecto al resto de los procesados; dicho sobreseimiento fue recurrido por el Fiscal pero confirmado por el tribunal superior.

78. Ha sabido también el Representante Especial que el procedimiento instruido por la matanza mariva de sindicalistas de FENASTRAS, a fines de octubre de 1989, se encuentra prácticamente paralizado en la fase de investigación.

79. Dio cuenta el Representante Especial en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 54/ que los militares acusados de la muerte del padre Ignacio Ellacuría s.j. y otras personas, habían sido puestos a disposición del Juzgado 4° de lo Penal de la ciudad de San Salvador. El Representante Especial expresó también su confianza de que el proceso judicial siguiera su curso regular hasta que se dictara una sentencia justa y ejemplar. Sin embargo, las informaciones posteriores sobre el desarrollo del proceso no revelan que se haya conseguido ya tal resultado. En efecto, según noticias de difusión pública 55/, el libro-registro de entradas y salidas de la Escuela Militar de El Salvador, considerado como prueba documental importante, habría sido quemado, circunstancia admitida por el oficial responsable del libro-registro en cuestión. El abogado defensor de dicho oficial habría explicado que el documento carecía de importancia y que su destrucción era rutinaria. El archivero de la Escuela declaró empero que no era rutinario destruir los libros. Durante su estancia en El Salvador el Representante Especial no ha tenido tiempo de realizar un estudio exhaustivo del procedimiento seguido por la muerte del padre Ellacuría y otras personas, pero quiere dejar constancia de tres rigurosos y detallados informes redactados al respecto. El primero es el informe provisional sobre El Salvador de la Comisión Especial del Presidente de la Cámara de Representantes o "Informe Moakley", de 30 de abril de 1990; en él late fundamentalmente la duda grave de si hubo en el crimen militares involucrados de categoría superior a los actualmente procesados. El segundo informe es el del Lawyers Committee for Human Rights sobre la investigación de los asesinatos de los jesuitas en El Salvador, de 27 de julio de 1990; en él subyace la misma duda del Informe Moakley y se hace además mención convincente de destrucción de pruebas importantes (quema de libro-registro de la Escuela Militar) y otros graves entorpecimientos del procedimiento, que en modo alguno son imputables al juez instructor de la causa. El tercer informe de 2 de octubre de 1990, es nuevamente del Lawyers Committee y comporta una puesta al día del análisis del procedimiento; en él queda confirmada la falta de cooperación de la Fuerza Armada. Así las cosas, y dejando constancia de que el juez actúa con la mayor diligencia y profesionalidad, el Representante Especial no puede menos que expresar su preocupación por la falta de progresos en un procedimiento, que como dijo en su informe de 1989 a la Comisión de Derechos Humanos 56/ era un caso test para la credibilidad de los intentos de reforma judicial en el país.

80. El Representante Especial dio cuenta en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 57/ de la muerte de dos técnicos de televisión con ocasión del fuego del Ejército el día de las elecciones presidenciales. Ahora ha tenido noticias de que el soldado acusado de una de esas muertes fue absuelto por un Tribunal de Conciencia 58/.

81. El Juzgado 8° de lo Penal confirmó el día 8 de mayo de 1990 el sobreseimiento definitivo respecto a determinados militares y personas civiles en procedimientos seguidos por secuestro; el procedimiento continúa sin embargo respecto a otros militares y civiles 59/.

/...

82. La conclusión a la que llega el Representante Especial después de valorar los datos recogidos en los párrafos anteriores es que, en su conjunto, y aunque la alegada impunidad de los miembros de la Fuerza Armada no sea absoluta, la justicia penal salvadoreña sigue funcionando de modo muy insatisfactorio, y no sólo por la falta del debido progreso en los casos más relevantes sino también porque no ha tenido conocimiento de que se hayan dictado sentencias en muchísimos otros casos de graves violaciones de los derechos humanos de los que ha dado cuenta en los informes que viene redactando desde 1981. Pero en este punto se impone una precisión importante: las fallas y deficiencias se producen mucho más en el campo de la investigación de los hechos que en lo que concierne a actividad propiamente juzgadora de los jueces y tribunales. Estos tienen que dictar sentencias sobre la base de los hechos establecidos en la investigación, y es ésta la que resulta notoriamente insuficiente. De otro lado, no es hoy al Poder Judicial al que compete la investigación, sino a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, que depende del Poder Ejecutivo. En este contexto el Representante Especial no puede sino apoyar los deseos de la Corte Suprema de El Salvador de que, mediante la creación de un cuerpo de policía judicial, la investigación de los delitos pase a depender del poder jurisdiccional.

V. RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
EN EL CONFLICTO ARMADO

83. Según la información de Tutela Legal 60/, las cifras de personas muertas por el Ejército en acciones militares, sin que pueda determinarse cuántas pertenecen a la población civil y cuántas a combatientes de la guerrilla son las siguientes:

Personas muertas por el Ejército en acciones militares, sin que
pueda determinarse cuántas pertenecen a la población civil y
cuántas a combatientes de la guerrilla

(Fuente: Tutela Legal)

	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Enero	82	134
Febrero	87	84
Marzo	76	75
Abril	129	37
Mayo	157	54
Junio	76	69
Julio	83	50
Agosto	78	15+
Septiembre	52	

84. La misma fuente reprocha al Ejército la muerte de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos de acuerdo a las siguientes cifras:

Muerte de civiles a consecuencia del contacto con artefactos
explosivos colocados por el Ejército

(Fuente: Tutela Legal)

	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Enero	2	0
Febrero	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	3	0
Julio	0	0
Agosto	1	0+
Septiembre	0	

85. El Representante Especial ha recibido noticias específicas de diversas fuentes sobre ataques de la Fuerza Armada salvadoreña que habrían producido víctimas entre la población civil y daños en sus propiedades. Así, el 11 de febrero de 1990 la Fuerza Aérea habría bombardeado y ametrallado la localidad repoblada de Corral de Piedra, en Chalatenango, causando la muerte de cinco personas civiles y heridas otras 16 personas 61/. En San Salvador el Representante Especial tuvo ocasión de escuchar a testigos de estos hechos, parientes de las víctimas, que confirmaron la anterior versión. Trasladadas estas alegaciones al Estado Mayor de la Fuerza Armada, se dijo al Representante Especial que fue el FMLN el que llevó el combate a la localidad y que el Alto Mando reconoció el error y ofreció una indemnización. Desde el 3 al 11 de abril la Fuerza Armada habría destruido la parroquia y viviendas de campesinos de ciertas localidades de Chalatenango 62/. El día 16 de mayo, el Ejército habría lanzado morteros sobre la localidad repoblada de Santa Marta, en Cabañas, causando heridas a dos jóvenes y destruyendo viviendas 63/. El día 25 siguiente, la Fuerza Armada ocupó varias localidades repobladas en el Departamento de Chalatenango, destruyendo cosechas y ganado aunque sin causar víctimas civiles 64/. Los días 8, 9 y 11 de junio tuvieron lugar operaciones militares en otras localidades repobladas y durante ellas el Ejército detuvo a varias personas 65/. El 28 de julio la Fuerza Armada atacó la comunidad "Ignacio Ellacuría" sin producir muertes o lesiones a la población civil 66/. Un comunicado posterior del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador 67/ da cuenta de otros ataques de la Fuerza Armada contra distintas localidades en los Departamentos de Chalatenango, Usulután, Morazán, Cuscatlán y Cabañas; en algunos de esos ataques se produjeron incendios de cosechas y otros daños; en el ataque a la localidad de Tocoatique, Departamento de Morazán, el 25 de julio, dos personas civiles habrían perecido por fuego del Ejército. Según otras informaciones 68/ dos niños murieron en la localidad Los Prados, Departamento de Chalatenango, a consecuencia de las granadas lanzadas por la Fuerza Armada contra una vivienda; testigos presenciales confirmaron estos hechos ante el Representante Especial.

86. De la información recogida en los párrafos anteriores y del examen de algunos testigos deduce el Representante Especial que la condición de la población civil que se encuentra en zonas conflictivas sigue siendo sumamente dura y penosa. El Representante Especial considera también que con ocasión de los combates con el FMLN, la Fuerza Armada causa muertes y lesiones entre la población civil, aunque no de forma general e indiscriminada sino por descuido y con carácter ocasional; la cifra exacta de estas muertes es difícil de determinar aunque resulta sin duda inferior a la del año anterior y a la de ejecuciones sumarias fuera de los combates. Es esta también la opinión de fuentes independientes plenamente fiables. La Fuerza Armada produce también daños en bienes públicos y privados, así como en las cosechas, aunque después de combates encarnizados puede ser difícil determinar cuál de los contendientes, si el Ejército o el FMLN, ha causado los daños.

87. El día 10 de septiembre de 1990 murió por fuego del Ejército en la localidad de La Montañita, Departamento de Santa Ana, la joven médica española Begoña García Arandigoyen, que al parecer prestaba sus servicios profesionales a los combatientes del FMLN. Esta organización guerrillera sostiene que la médica fue capturada viva y ejecutada momentos después; el Ejército alega por el contrario que la ciudadana española murió en el curso de un combate a larga distancia 69/. El Representante Especial ha tenido ocasión de examinar el informe de autopsia realizado en España 70/ del que se desprende que Begoña García recibió varios disparos: uno en la región temporo-malar derecha, otro en la nuca realizado al parecer desde muy cerca y otros en la parte inferior del cuello, en la parte superior de los codos y en el muslo izquierdo. En el Estado Mayor de la Fuerza Armada se aseguró al Representante Especial que la ciudadana española era combatiente, porque la prueba de la parafina en las manos indicaba que manejaba las armas, y aunque ello fuese así, el Representante Especial entiende que las características del disparo en la nuca podrían dar a entender que fue rematada una vez capturada. En San Salvador, el Estado Mayor mostró al Representante Especial escritos encontrados en la ropa de la joven española que revelan en su escritura bella y patética un profundo desencanto de su adscripción al FMLN y un ardiente deseo de regresar al hogar. En cualquier caso, el Representante Especial puede menos que expresar su preocupación por esta muerte y recordar las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario de respetar la vida e integridad física del personal médico y los combatientes capturados.

88. En lo concerniente a las víctimas civiles causadas por las acciones militares de la guerrilla, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) dan las siguientes cifras de personas muertas a consecuencia del contacto con artefactos explosivos colocados por la guerrilla:

Muertes de civiles a consecuencia del contacto con artefactos
explosivos colocados por la guerrilla

	Fuente: Tutela Legal		Fuente: Comisión de Derechos Humanos (gubernamental)	
	1989	1990	1989	1990
Enero	2	0	9	6
Febrero	4	0	5	1
Marzo	0	0	11	2
Abril	1	0	14	2
Mayo	17	1	22	7
Junio	0	1	5	3
Julio	0	1	0	3
Agosto	0	0+	0	3
Septiembre	0		0	

89. Por otra parte, Tutela Legal suministra las cifras siguientes, sobre la muerte de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos, sin que haya podido determinarse quiénes fueron los responsables de su colocación:

Muertes de civiles a consecuencia del contacto
con artefactos explosivos sin conocerse los
responsables de su colocación

(Fuente: Tutela Legal)

	1989	1990
Enero	2	4
Febrero	2	0
Marzo	0	0
Abril	4	2
Mayo	1	0
Junio	0	3
Julio	2	1
Agosto	0	1+
Septiembre	1	

90. En cuanto a la población civil lesionada a consecuencia del contacto con artefactos explosivos colocados por organizaciones del FMLN, la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador da las siguientes cifras:

Enero	14
Febrero	17
Marzo	22
Abril	16
Mayo	11
Junio	25
Julio	11
Agosto	22

91. El fuego de la guerrilla ha producido ocasionalmente otras víctimas en la población civil. Así, en el ataque del FMLN a efectivos de CETIPOL, en Santa Tecla, en abril de 1990, se produjo la muerte de una persona civil, hecho que la organización guerrillera reconoce y lamenta en comunicado público de 4 de abril de 1990. De otro lado, según comunicado de la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador, el día 23 de agosto de 1990 el FMLN atacó un vehículo militar que transportaba a heridos, ocasionando dos muertos y varios heridos graves. Por otra parte, y según información de la prensa local 71/, cuando fuerzas del FMLN atacaron el día 20 de agosto el Centro de Transmisiones de la Fuerza Armada, cercano al Palacio Presidencial, habrían causado la muerte del niño Juan Antonio Pérez Sánchez y heridas en cuatro personas civiles, además de daños en propiedades particulares. En boletín de prensa del FMLN de 21 de agosto de 1990 la organización reconoce haber provocado heridas en cuatro personas, aunque no la muerte del niño, confesando que se trató de un grave error de procedimiento operativo. Parece ser, en efecto, que el niño no llegó a morir 72/.

VI. ESFUERZOS PARA MEJORAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS RESULTADOS

92. El Representante Especial hace constar en primer término que, dentro del actual proceso de negociación entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, se firmó en San José, Costa Rica, el día 26 de julio de 1990 un Acuerdo sobre Derechos Humanos. En el preámbulo de dicho Acuerdo, que tiene naturaleza política, se recuerda que el ordenamiento jurídico de El Salvador consagra el reconocimiento de los derechos humanos y el deber del Estado de respetarlos y garantizarlos; se recuerda asimismo que el Estado ha contraído obligaciones internacionales al respecto. Y es interesante destacar que en ese preámbulo se considera que el FMLN tiene la capacidad y la voluntad y asume el compromiso de respetar los atributos inherentes a la persona humana. A tenor de lo estipulado en el Acuerdo una y otra parte se comprometen a respetar los más elementales derechos del ser humano. Rasgo muy destacable del Acuerdo es la instauración de un procedimiento de verificación internacional a cargo de una misión de las Naciones Unidas cuyo director será designado por el Secretario General y que iniciará sus funciones a partir del momento del cese del enfrentamiento armado. Es de señalar que la actuación de la misión no excluye la aplicación de otros procedimientos internacionales de promoción y respeto de los derechos humanos 73/. El Representante Especial no puede sino encomiar vivamente la firma del Acuerdo, en el que hay que poner las mejores esperanzas.

93. La Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías recomendó al Representante Especial en su resolución de agosto de 1990 que en su informe a la Asamblea General pusiese especial énfasis en verificar si se han cumplido los compromisos contraídos por las partes en el Acuerdo de San José mencionado en el párrafo anterior. Pues bien, como se dice en el informe presentado al Representante Especial por ocho organizaciones no gubernamentales que trabajan en El Salvador 74/, después de la firma del Acuerdo de San José han persistido las violaciones aunque su número ha bajado. Más concretamente, y por lo que respecta a los asesinatos, señalan aquellas fuentes que en el mes anterior a la

firma del Acuerdo se imputaron ocho a la Fuerza Armada y en el mes siguiente ninguno; uno al FMLN en el mes anterior y ninguno en el mes siguiente; en cambio sí habría la misma preocupante proporción de asesinatos cometidos por "desconocidos u hombres de civil" y por "escuadrones de la muerte". En cuanto a desapariciones imputadas al Estado el número habría bajado de seis a tres; los secuestros del FMLN habrían descendido de cinco a cero. La pregunta que se hacen las organizaciones informantes es si este descenso de la cifra de violaciones es meramente coyuntural u obedece a la adopción de medidas por las partes para evitar las violaciones.

94. En lo que respecta más particularmente a los esfuerzos de las autoridades constitucionales de El Salvador para mejorar la suerte de los derechos humanos, el Representante Especial recuerda las actividades de la Comisión de Derechos Humanos (gubernamental) de El Salvador, cuyas labores ha encomiado en anteriores informes; testigos presentados por organizaciones humanitarias no gubernamentales manifestaron al Representante Especial que la Comisión gubernamental habría investigado sus casos; un testigo admitió deber su libertad a las gestiones de la referida Comisión gubernamental. El Representante Especial señala asimismo que en el mes de julio de 1990, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada creó una oficina para atender denuncias sobre violaciones de los derechos humanos 75/. Conviene dejar constancia igualmente de que, en cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo de San José de julio de 1990, la Fuerza Armada Salvadoreña ha establecido unos procedimientos sobre detenciones y derechos de los detenidos; se dispone en esos procedimientos que sólo en caso de flagrante delito es posible la detención a cualquier hora y sin orden escrita; en otros casos la detención únicamente es posible en virtud de autorización escrita de la autoridad judicial, debiendo los captores vestir uniforme reglamentario y acreditar su condición; al detenido se le informará de los motivos de la detención, se le explicará sus derechos, y se le posibilitará la comunicación inmediata con un abogado defensor 76/.

95. De otro lado, han continuado impartándose incesantemente entre los miembros de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad enseñanzas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados.

96. El Representante Especial no puede dejar de mencionar aquí la altamente encomiable labor que para protección de las víctimas del conflicto realiza en El Salvador el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tal labor, consentida por las dos partes en el conflicto, se traduce en una serie de actividades específicas, entre las que destacan las visitas a personas detenidas por razones relacionadas con el conflicto, el restablecimiento de lazos familiares, la protección a la población civil, los socorros, la asistencia médica y la difusión de los principios del derecho internacional humanitario.

97. En lo que respecta al orden judicial, el Representante Especial fue informado por la Corte Suprema de Justicia de la creación de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, de ocho juzgados itinerantes de apoyo, de un Centro de Información de Detenidos, del Consejo Nacional de la Judicatura y del Instituto de Medicina Forense. Manifiesta también la Corte su intención de crear un organismo de investigación dependiente del poder judicial. El Representante Especial espera y desea que todas estas medidas alcancen rápidamente los resultados perseguidos de una pronta y eficaz administración de justicia.

98. De otro lado, la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL) ha continuado en su labor de puesta al día del cuerpo legislativo salvadoreño 77/. Entre los anteproyectos de ley presentados últimamente a la Asamblea Legislativa destacan los siguientes: anteproyecto de reformas a los Códigos Penal, Procesal Penal y de Justicia Militar (regulación de la pena de muerte, recursos de gracia, restricción de la libertad y otros); anteproyecto de reformas a la ley orgánica judicial; y anteproyecto de reformas al Código Procesal Penal, ley de procedimientos especiales sobre accidentes de tránsito, ley orgánica del Ministerio Público y ley orgánica judicial (referente a las normas que regulan la asistencia legal y la defensa).

99. En suma, el Representante Especial deja constancia de los permanentes e innegables esfuerzos del Presidente de la República y otros poderes constitucionales salvadoreños por mejorar la situación de los derechos humanos en el país, y si bien tales empeños han producido un descenso en la cifra de graves violaciones de aquellos derechos, particularmente tras la firma el 2 de julio del Acuerdo de San José, hay que registrar el hecho insoslayable de que persisten las violaciones. La situación dista mucho de ser satisfactoria.

100. En cuanto al FMLN, y recordando que el Acuerdo de San José de 26 de julio de 1990 le supone dotado de capacidad y voluntad para respetar los derechos humanos, hay que señalar que decretó un cese de fuego unilateral los días 24 y 25 de febrero con ocasión de la muerte del llorado presidente Duarte 78/. Conviene señalar también que el día 13 de marzo de 1990, la Comandancia General del frente decidió a partir del 16 siguiente la total suspensión de sabotajes contra el transporte público, establecimientos comerciales, comunicaciones telefónicas y atentados contra funcionarios públicos y personas civiles que no forman parte de aparatos militares o paramilitares 79/. El grado de cumplimiento por el FMLN del Acuerdo de San José ha sido expuesto en un párrafo anterior.

101. El Representante Especial ha recibido información de que en varias ocasiones el FMLN ha liberado a militares capturados en combate; a un coronel y ocho soldados el 11 de julio 80/; a un sargento y dos soldados heridos el 6 de agosto 81/; y cinco soldados el 24 de agosto 82/.

VII. CONCLUSIONES

102. Después de valorar detenidamente la información recogida en el presente informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador durante los meses transcurridos de 1990, el Representante Especial formula las conclusiones que siguen:

Derechos económicos, sociales y culturales

103. La situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de El Salvador continúa viéndose afectada negativamente por la conjunción de una serie de factores de distinta índole entre los que destaca la persistencia del conflicto armado entre la Fuerza Armada y el FMLN y el subsiguiente clima de violencia.

104. También los ataques de las organizaciones guerrilleras del FMLN a la infraestructura económica del país perjudican gravemente el disfrute presente y futuro de importantes derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos salvadoreños, si bien hay que dejar constancia del hecho de que desde el 16 de marzo de 1990 el FMLN ha suspendido los atentados contra el transporte público y las líneas telefónicas.

105. Han continuado durante el presente año las acciones gubernamentales contra organizaciones humanitarias, sindicales, campesinas y de otra índole; el Gobierno alega la docilidad de algunas de esas organizaciones hacia el FMLN, hecho que niegan las organizaciones en cuestión, pero que de ser cierto sólo justifica acciones conformes a la ley y respetuosas de los derechos humanos.

Ejecuciones sumarias

106. Miembros del aparato estatal, particularmente de la Fuerza Armada y de la Defensa Civil, han perpetrado ejecuciones sumarias políticamente motivadas, en número difícil de determinar con exactitud pero en niveles inferiores a los muy elevados del pasado año, habiendo sido perceptible el descenso después de la firma el 26 de julio de 1990 del Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos. Dato a tener en cuenta es el clima de intimidación que reina en ciertos sectores de la población por amenazas explícitas de ejecuciones sumarias u otras violaciones de los derechos humanos.

107. Numerosas fuentes continúan imputando ejecuciones sumarias y otras violaciones de los derechos humanos a los llamados "escuadrones de la muerte", a los que se supone conectados con la Fuerza Armada o Cuerpos de Seguridad o tolerados por dicha fuerza y cuerpos. El Representante Especial encuentra verosímil en principio dicha imputación, aunque las dificultades de investigación de tal tipo de crímenes no le permiten llegar a conclusiones seguras y definitivas en casos específicos; no excluye de otra parte que bajo la apariencia de esas actividades se encubran delitos comunes.

108. Por su parte, el FMLN ha continuado perpetrando ejecuciones sumarias de jefes y oficiales del Ejército y presuntos colaboradores de la Fuerza Armada, si bien parece haber suspendido esta práctica tras la firma del Acuerdo de San José; ha llevado a cabo también algunas acciones urbanas con resultado de muerte y lesiones en personas civiles.

Secuestros y desapariciones

109. Han seguido registrándose casos de desapariciones políticamente motivadas de personas, resultando difícil determinar el número de ellas y la identidad de los captores, aunque el Representante Especial no excluye que en algunos casos hayan podido participar "escuadrones de la muerte".

110. También las organizaciones guerrilleras han llevado a cabo secuestros de personas civiles. El Representante Especial ha recibido noticias de reclutamientos forzosos de menores, que la organización guerrillera ha desmentido rotundamente.

Trato a los presos políticos

111. En los interrogatorios extrajudiciales de los detenidos por razones políticas se ha recurrido en ocasiones a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, si bien el Representante Especial piensa que estas prácticas no son generalizadas ni obedecen a una política gubernamental.

La justicia penal

112. En los meses transcurridos de 1990 han recaído algunas sentencias condenatorias contra miembros de la Fuerza Armada por hechos ocurridos años atrás, lo que demuestra que la impunidad no es absoluta; sin embargo, otros procedimientos seguidos contra miembros de dicha Fuerza se desarrollan muy lentamente, y en el instruido por el asesinato del padre Ellacuría y otras personas no parece existir la suficiente cooperación por parte de la Fuerza Armada, habiéndose llegado incluso a la destrucción de pruebas importantes; y el Representante Especial no ha sabido de progreso alguno en procedimientos sobre múltiples y graves violaciones de derechos humanos ocurridos en años pasados. Cabe estimar en conclusión que la justicia penal salvadoreña sigue funcionando insatisfactoriamente, si bien las deficiencias básicas se sitúan mucho más en el campo de la investigación y esclarecimiento de los hechos que en la actividad propiamente juzgadora de los órganos judiciales.

El conflicto armado

113. La situación de la población civil de las zonas más conflictivas es harto dura y penosa y además las acciones bélicas de la Fuerza Armada han producido muertes y lesiones entre los integrantes de aquella población, si bien no de forma general, indiscriminada o intencionada sino por descuido y con carácter ocasional; la cifra de tales muertes es difícil de determinar con exactitud, aunque resulta inferior a la del año pasado y a la de ejecuciones sumarias fuera de combate.

114. Por su parte el FMLN ha ocasionado muertes o lesiones en personas civiles a consecuencia del contacto con minas explosivas, aunque en ocasiones puede resultar difícil determinar si fueron sus organizaciones o la Fuerza Armada quienes colocaron los artefactos; el fuego de la guerrilla ha causado de manera ocasional otras víctimas civiles.

Esfuerzos para mejorar el respeto a los derechos humanos y sus resultados

115. El empeño del Presidente de la República y otros poderes constitucionales salvadoreños por mejorar la suerte de los derechos humanos resulta innegable, y aunque ha comportado un descenso en la cifra de graves violaciones de esos derechos - particularmente tras la firma el 26 de julio de 1990 del Acuerdo de San José - hay que registrar el hecho insoslayable de que persisten las violaciones.

116. También el FMLN ha demostrado interés por el respeto a los derechos humanos, lo cual tampoco ha evitado la comisión de graves violaciones a esos derechos, aunque en número menor que el año anterior; muestra de aquel interés es, entre otras medidas, la firma del Acuerdo de San José dentro del proceso de negociación con el Gobierno.

117. El Gobierno y el FMLN han reanudado e intensificado el proceso de negociación, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, con vistas a una terminación del conflicto.

VIII. RECOMENDACIONES

118. El Representante Especial continúa preocupado por la situación de los derechos humanos en El Salvador, pese al hecho de que en los meses transcurridos de 1990 se haya registrado respecto al año 1989 una disminución de la cifra de las violaciones, y consiguientemente insta de nuevo y con el mayor énfasis al Gobierno y a todos los poderes, instituciones y fuerzas políticas del país, incluyendo a las organizaciones guerrilleras, a la adopción inmediata de cuantas medidas puedan conducir a la erradicación total de los atentados contra la vida, integridad y dignidad de las personas tanto en los combates como fuera de ellos.

119. El Representante Especial exhorta asimismo con el mayor énfasis al Gobierno y al FMLN a que en el proceso en curso de negociación den muestras de realismo político, imaginación y generosidad para con el pueblo salvadoreño, a fin de que se llegue lo antes posible a una paz justa y duradera y a la subsiguiente reconciliación y reconstrucción del país. El Representante Especial piensa que la reducción de la violencia dentro y fuera de los combates contribuirá a crear condiciones de confianza recíproca que hagan más viable el pronto y buen resultado de la negociación en curso.

120. El Representante Especial reitera particularmente a los poderes constitucionales de la República de El Salvador las recomendaciones contenidas en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 83/ y de manera más específica:

a) La adopción de medidas que impidan toda suerte de amenazas e intimidación psicológica a ciertos sectores de la población;

b) La persistencia en el impulso a la reforma judicial y la creación de un cuerpo de investigación criminal eficiente que dependa del poder judicial;

c) El impulso a los procesos judiciales instruidos por las matanzas masivas perpetradas en el último trimestre de 1989 hasta que finalicen lo antes posible en sentencias justas y ejemplares;

d) La persistencia en el cumplimiento del programa de la reforma agraria y otras reformas estructurales necesarias para un mayor bienestar de la población.

121. Al FMLN y organizaciones guerrilleras el Representante Especial reitera las recomendaciones que formuló en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 84/ y en particular:

a) La persistencia firme en la política de no colocar minas de contacto que puedan causar muertes o lesiones en la población civil;

b) La abstención inmediata de toda clase de acciones urbanas que puedan causar víctimas civiles.

/...

122. Finalmente, el Representante Especial recomienda una vez más a todos los Estados de la comunidad internacional, particularmente a los más ricos y desarrollados, que intensifiquen la ayuda necesaria para el alivio y la mejora de la suerte de los ciudadanos salvadoreños desplazados, refugiados o reinstalados a consecuencia del conflicto armado.

Notas

- 1/ El País, 3 de febrero de 1990.
- 2/ Le Monde, 2 de febrero de 1990.
- 3/ El País, 11 de febrero de 1990.
- 4/ The Guardian, 14 de marzo de 1990.
- 5/ Herald Tribune, 23 de marzo de 1990.
- 6/ El País, 3 de abril de 1990.
- 7/ Le Monde, 27 de junio de 1990.
- 8/ INFORPRESS Centroamericana, 5 de julio de 1990.
- 9/ El Salvador on Line, 16 de abril de 1990.
- 10/ Ibid., 11 de junio de 1990.
- 11/ Ibid., 3 de septiembre de 1990.
- 12/ Ibid., 2 de abril de 1990.
- 13/ Ibid., 14 de mayo de 1990.
- 14/ Ibid., 5 de febrero de 1990.
- 15/ Ibid., 28 de mayo de 1990.
- 16/ Ibid., 11 de junio de 1990.
- 17/ Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano Salvadoreño, noviembre de 1989 a septiembre de 1990.
- 18/ Informe de la Fuerza Armada de El Salvador sobre los derechos humanos durante el período de octubre de 1989 a septiembre de 1990.
- 19/ El Salvador on Line, 9 de julio de 1990.
- 20/ Ibid., 23 de abril de 1990.
- 21/ Ibid., 14 de mayo de 1990.

Notas (continuación)

- 22/ Comunicado del Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES), de 16 de agosto de 1990.
- 23/ La Prensa Gráfica, 5 de julio de 1990.
- 24/ Boletín de Prensa, No. 162, 16 de junio de 1990.
- 25/ El Salvador on Line, 6 de agosto de 1990.
- 26/ Ibid., 20 de agosto de 1990.
- 27/ Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, boletines semanales.
- 28/ El Salvador on Line, 12 de marzo de 1990.
- 29/ Ecumenical Christian Support Group for El Salvador, 10 de febrero de 1990.
- 30/ El Salvador on Line, 19 de marzo de 1990.
- 31/ Ibid., 26 de marzo de 1990.
- 32/ Ibid., 9 d julio de 1990.
- 33/ El Mundo, 21 de julio de 1990.
- 34/ La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, 1° de mayo de 1990.
- 35/ Comunicado al Representante Especial de 23 de mayo de 1990.
- 36/ El Diario de Hoy, 19 de junio de 1990.
- 37/ El Salvador on Line, 23 de julio de 1990.
- 38/ Comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (gubernamental), 25 de julio de 1990.
- 39/ El Diario de Hoy, 31 de julio de 1990.
- 40/ La Prensa Gráfica, 31 de julio de 1990.
- 41/ Comunicado de 3 de julio de 1990.
- 42/ Salpress, 28 de junio de 1990.
- 43/ Comunicado de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de Ginebra, 2 de abril de 1990.

Notas (continuación)

- 44/ Comunicado de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de Ginebra, 17 de julio de 1990.
- 45/ Véase también Estudios Centroamericanos, junio-julio de 1990.
- 46/ El Diario de Hoy, 29 de junio de 1990.
- 47/ Comunicado de la Misión Permanente de El Salvador ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos internacionales en Ginebra, 28 de junio de 1990.
- 48/ El Salvador on Line, 14 de mayo de 1990.
- 49/ Salpress, télex de 9 de marzo de 1990.
- 50/ Memorándum referente a las labores de la Corte Suprema de Justicia sobre la tutela, protección y desarrollo de los derechos humanos comprendidos entre el 12 de octubre de 1989 y el 4 de octubre de 1990.
- 51/ Véase Lawyers Committee for Human Rights, A Decade of Failed Promises: the Investigation of Archbishop Romero's Murder, marzo de 1990.
- 52/ El Salvador on Line, 23 de abril de 1990.
- 53/ La Prensa Gráfica, 19 de abril de 1990.
- 54/ E/CN.4/1990/26, párr. 77.
- 55/ El Salvador on Line, 7 de marzo de 1990; ibid., 4 de junio de 1990.
- 56/ E/CN.4/1990/26, párr. 45.
- 57/ Ibid., párr. 4.
- 58/ Diario Latino, 7 de junio de 1990.
- 59/ Ibid., 2 de mayo de 1990.
- 60/ Tutela Legal del Arzobispado, boletines semanales.
- 61/ El Salvador-Proceso, 28 de febrero de 1990; informe de 12 de febrero de 1990.
- 62/ El Salvador on Line, 16 de abril de 1990.
- 63/ Ibid., 21 de mayo de 1990.
- 64/ Ibid., 4 de junio de 1990.

Notas (continuación)

- 65/ Ibid., 18 de junio de 1990.
- 66/ Ibid., 6 de agosto de 1990.
- 67/ CISPES, 23 de agosto de 1990.
- 68/ El Salvador on Line, 17 de septiembre de 1990.
- 69/ Ibid., 17 de septiembre de 1990.
- 70/ Documento del Hospital de Navarra, Pamplona, 22 de septiembre de 1990.
- 71/ El Diario de Hoy, 22 de agosto de 1990.
- 72/ Declaraciones de Monseñor Rosa Chávez, de 26 de agosto de 1990.
- 73/ Véase Naciones Unidas, Boletín de Prensa, 30 de julio de 1990 (CA/33).
- 74/ Informe de 1° de octubre de 1990 presentado por la Oficina de Abogados Asociados; Centro de Estudios para la aplicación del Derecho; Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (no gubernamental); Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano Salvadoreño; Dirección de Derechos Humanos de la Unión Nacional Obrera Campesina; Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana; Socorro Jurídico Cristiano, e Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador.
- 75/ Comunicado de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra, de 11 de julio de 1990.
- 76/ Comunicado de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra, de 13 de agosto de 1990.
- 77/ Informe presentado al Representante Especial el 5 de octubre de 1990.
- 78/ El Salvador on Line, 26 de febrero de 1990.
- 79/ Comunicación oficial del FMLN, de 13 de marzo de 1990, puesto a disposición del Representante Especial.
- 80/ El Salvador on Line, 16 de julio de 1990.
- 81/ Comunicado público del FMLN, de 23 de agosto de 1990.
- 82/ El Salvador on Line, 3 de septiembre de 1990.
- 83/ E/CN.4/1990/26, párr. 126.
- 84/ Ibid., párr. 127.